

Gobierno y PNV abren la puerta a un pacto para los Presupuestos

Acuerdan el traspaso de seis competencias al País Vasco, la condición que habían puesto los nacionalistas para negociar las cuentas

RAMÓN GORRIARÁN

MADRID. Gobierno y PNV resoplaron de alivio tras el acuerdo para traspasar seis competencias al País Vasco. El Ejecutivo porque de esta forma da el primer paso para aprobar los Presupuestos de 2012 con el apoyo de los nacionalistas vascos, una condición inexcusable para agotar la legislatura. Y el PNV porque reafirma su papel de interlocutor

preferente ante José Luis Rodríguez Zapatero en la defensa de los intereses de Euskadi en detrimento del lehendakari Patxi López.

Tras una reunión de cuatro horas largas, las delegaciones del Gobierno y de los nacionalistas vascos cerraron ayer el acuerdo para la transferencia de las competencias de regulación de empleo, con la que el Gobierno de Vitoria podrá gestionar los ERE de empresas estatales; transporte marítimo y fluvial; transporte por carretera de pasajeros y mercancías; ampliación de la enseñanza náutico pesquera; las delegaciones del registro sobre la propiedad intelectual; y los archivos provinciales de titularidad estatal. Materias valoradas en unos modes-

tos 2,3 millones de euros y que supondrán el traspaso de apenas una veintena de funcionarios.

Pero en este caso el volumen económico y de personal es lo de menos. Lo relevante es la recuperación de la complicidad entre ambas partes, venida a menos en los últimos meses, y, sobre todo, que abre la puerta a un ulterior acuerdo presupuestario, que es vital para el Gobierno en su objetivo de sacar adelante las cuentas públicas del próximo año y agotar la legislatura en marzo de 2012, una obsesión casi personal de Zapatero. Con todo, tanto el Ejecutivo como los nacionalistas vascos se esforzaron en desvincular en público este acuerdo de los Presupuestos.

En privado, sin embargo, ambas partes reconocen que la conexión es evidente.

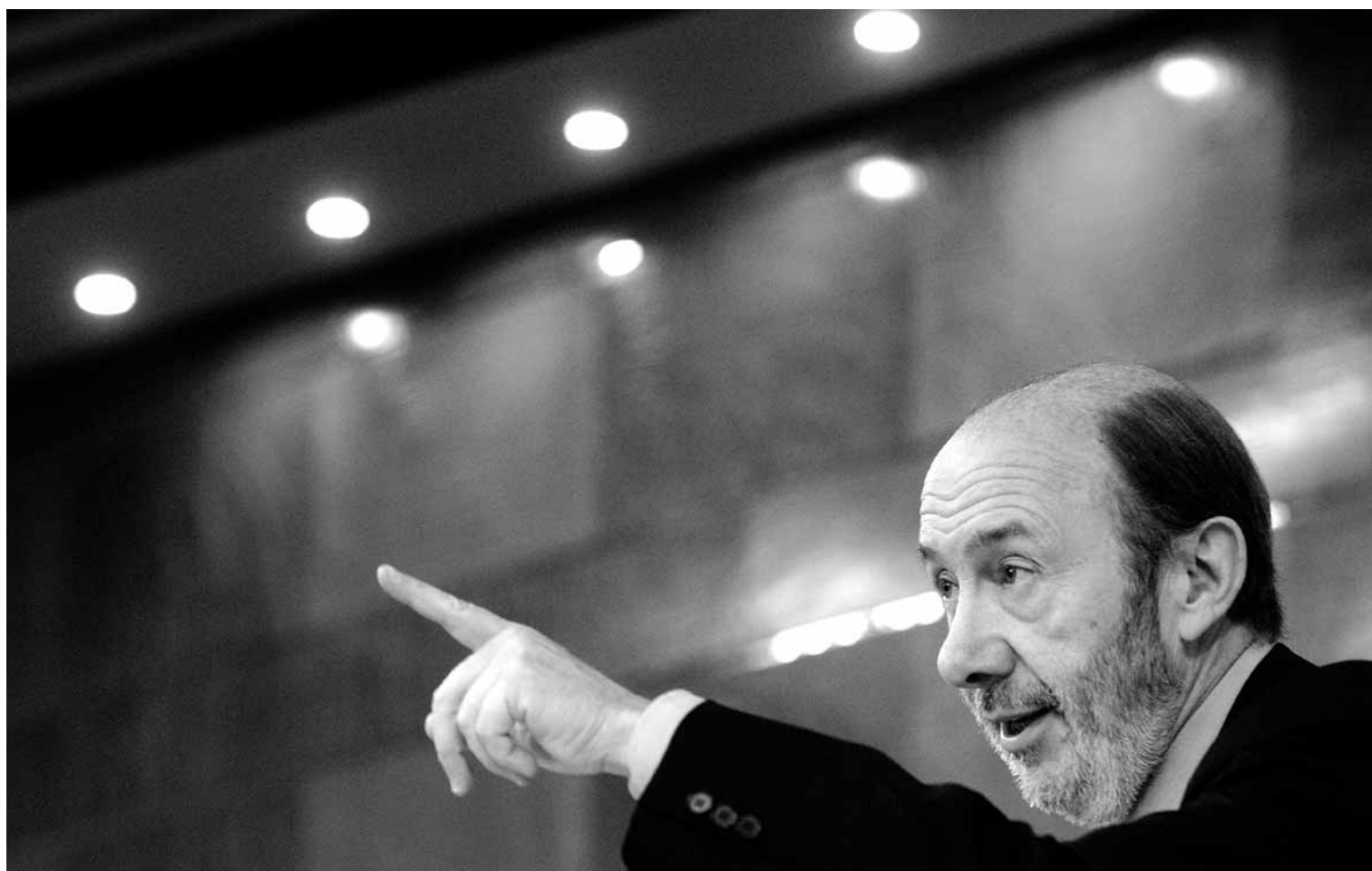
Tensiones previas

Tanto el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, como el portavoz del partido en el Congreso, Josu Erkoreka, advirtieron en las horas previas a la reunión que antes de hablar de las cuentas del próximo año o del techo de gasto para 2012 había que cerrar el traspaso de competencias pendientes. Unas observaciones que molestaron mucho en las filas socialistas, al extremo de que el diputado José María Benegas, uno de los negociadores, respondió que no admitían «amenazas». Las tensiones previas se diluyeron en cuan-

to se vieron la cara en las mesa de negociaciones. Fue una reunión «muy cordial», dijeron desde ambas delegaciones.

El acuerdo alcanzado es la primera buena noticia presupuestaria para el Gobierno en mucho tiempo. Los socialistas encajaron como pudieron la negativa rotunda de CiU a convertirse en socio presupuestario. Un desdén que sumado al de los grupos minoritarios de izquierda dejaba abocado al Ejecutivo a lograr el auxilio de los nacionalistas vascos, único grupo que con sus seis diputados garantiza la mayoría absoluta para aprobar los Presupuestos. El Gobierno cuenta con el voto favorable de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, partidos con los que ha sellado acuerdos autonómicos, pero sus cuatro escaños se quedan cortos para llegar al listón de los 176 diputados. Un objetivo que el PNV garantiza.

La aprobación de los Presupuestos son el requisito inexcusable para pensar en el agotamiento de la legislatura, una meta en la que Zapatero está empeñado pese a las opiniones en contra que hay en el PSOE e incluso dentro del Gobierno, que creen que será una agonía inútil llevar el mandato hasta marzo de 2012. El PNV, a su vez, no sale malparado en la sociedad. Además de obligar al Gobierno a cumplir el compromiso de traspasar en el primer semestre de este año un paquete de 11 competencias valorados en conjunto en 33 millones de euros, objetivo coronado con el pacto de ayer, tampoco está interesado en un adelanto electoral. Por un lado, los nacionalistas no quieren ni oír hablar de una mayoría absoluta del PP, un escenario en absoluto desdenable ahora; pero por otro necesita que se rebaje la pujanza de Bildu en el País Vasco, que ahora podría discutirle la primacía electoral en Euskadi.



Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer, durante la rueda de prensa que ofreció tras el Consejo de Ministros. :: JUANJO MARTÍN / EFE

Rubalcaba da largas a la supresión de las diputaciones

Admite que la propuesta que prepara el PSOE es difícil de llevar a la práctica y no verá la luz este año

P. DE LAS HERAS

MADRID. El Gobierno no tiene ninguna intención de legislar ahora para acabar con las diputaciones provinciales. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, admi-

tió ayer que el debate sobre la eliminación de estas instituciones, cuya función es la de prestar servicios a los municipios más pequeños, es «pertinente», y en estos momentos de crisis, «más pertinente que nunca» pero alegó que se trata de una cuestión muy delicada como para resolverla en el corto plazo.

El PSOE lleva tiempo estudiando una fórmula alternativa a la de las diputaciones y, según avanzó el jueves el secretario de Política Municipal del partido, Antonio Hernando, tiene intención de hacerla

pública en breve. Pero la sola mención de la futura propuesta ya ha soliviantado al PP.

El principal partido de la oposición –que ha hecho de la crítica a las deficiencias del actual modelo territorial un eje fundamental de su discurso– admite que es preciso «mejorar» el funcionamiento de estos organismos. Sin embargo, se opone a su desaparición. Defienden que se trata de órganos «útiles», sobre todo para los municipios pequeños, y que garantizan la igualdad en la prestación de servicios.

En total, hay en España 38 diputaciones provinciales (las forales vascas tienen un régimen propio) y manejan un presupuesto nada desdeñable; en 2010 llegó a los 6.479 millones de euros.

Al margen de que la postura oficial de los populares sea ahora la de que deben preservarse hace mucho tiempo que su utilidad está en cuestión. En las filas del PP hay quien admite en privado que merecería la pena estudiar su eliminación. Entre los socialistas, el primero en lanzar la piedra fue el vicesecretario general, José Blanco, pero en su partido se apresuraron a matizar que solo había hecho una reflexión a título personal. Ahora las cosas han cambiado, aunque solo a medias. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, remarcó ayer en el Senado que antes de hablar de medidas drásticas habría que promover la fusión o la mancomunidad de servicios de los municipios más pequeños.

Coalición Canaria gobernará las islas en alianza con los socialistas

EFE

LAS PALMAS. Coalición Canaria y el PSC-PSOE alcanzaron ayer un acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años en Canarias, en el que el nacionalista Paulino Rivero continuará siendo presidente del Ejecutivo y el secretario general socialista canario, José Miguel Pérez, el vicepresidente. Los socialistas dirigirán tres consejerías y los nacionalistas cinco, según hizo público el portavoz del PSC-PSOE en la comisión negociadora, Francisco Hernández Spínola.

En las pasadas elecciones autonómicas el Partido Popular, socio la legislatura pasada de Coalición Canaria, fue el partido más votado y obtuvo 21 diputados, los mismos que la formación nacionalistas, mientras que los socialistas se quedaron en 15. El acuerdo deberá ser ratificado el lunes por las direcciones de ambos partidos.